

Operación Colombia Verde ¿asunto de locos?

Por

Marta Ruiz

Junio 30 de 2006

Resumen

En enero pasado el Presidente Álvaro Uribe tomó la decisión de iniciar la erradicación manual y forzada de 5.000 hectáreas de coca en el parque nacional La Macarena. Aparentemente la decisión fue un impulso después de que las FARC atacaran a una patrulla del Ejército, que vigilaba tareas de erradicación en Vistahermosa, zona aledaña al parque. Cuando el anuncio se hizo público, muchos analistas pronosticaron una catástrofe humanitaria. Había muchas razones para ello:

1. La Macarena ha sido parte importante de la retaguardia de las Farc, mientras la fuerza pública prácticamente nunca ha entrado allí.
2. Después de que iniciaron las operaciones del Plan Patriota, ese se convirtió en el principal centro de operaciones del Bloque Oriental de las Farc.
3. Los cultivos ilícitos se duplicaron en dos años. Mientras en 2002 había 2.500 hectáreas en el parque, al finalizar el 2005 había cerca de 4.598. Era de esperarse que las Farc defendieran estos cultivos con ferocidad.

Pero si bien los cuentos suenan coherentes, las cuentas no dan. Desde una óptica puramente racionalista, la decisión del gobierno es subóptima.

La Macarena

En 1948 La Macarena fue declarada como la primera reserva natural del país. Se trataba de una extensa selva ubicada entre los municipios de Lejanías, Mesetas, San Juan de Arama, Vistahermosa, Uribe, La Macarena, Puerto Rico y Puerto Concordia, en el Meta. Su ubicación, que es a la vez su gran valor biológico, une dos ecosistemas principales del país: el andino y el amazónico. Desde La Macarena, siguiendo aguas arriba el río Duda, se llega hasta el páramo de Sumapaz. Bajando por el río Guayabero, al Guaviare. Aunque en los años 50, la región fue habitada por colonos aventureros, no fue hasta los 60 cuando se inició una verdadera colonización, alrededor de la bonanza marimbera y de la explotación maderera. Justo cuando en 1963, el gobierno por fin delimitó el área protegida en 900.000 hectáreas, entre los ríos Duda y Guayabero, y entre el Ariari y el Güejar. Pero la expedición de un decreto no frenó la depredación. Por eso cuando en 1970 llegó el Inderena a instalar una caseta, la frontera natural ya estaba bastante lejos. Poco después, en 1973, el área protegida quedó reducida a 630.000 hectáreas¹. Mientras tanto, se dirigió un proyecto colonizador en las otras áreas que dio origen a la llamada trocha ganadera, y una incipiente agroindustria de palma.

No sería sino hasta los años 80 donde el proceso colonización se haría fuerte, ligado a los cultivos de coca que fueron llevado a la región por narcotraficantes y esmeralderos, en particular, Gonzalo Rodríguez Gacha, quien fue el principal comprador de coca entre 1975 y 1990 cuando se produjo su muerte. De hecho, en 1984, la Policía y la DEA encontraron en jurisdicción de Puerto Rico, un complejo cocalero que cambiaría la historia del narcotráfico en Colombia. El General Luis Ernesto Gilibert relata así lo que encontró: *“Jamás había visto algo igual: una cadena de 16 laboratorios para el procesamiento de cocaína, siete pistas de aterrizaje y siete aviones nuevos, en medio de la selva. Conocía laboratorios pírricos para procesar máximo diez kilos de coca...esto era otra cosa: estábamos en Tranquilandia...cinco mil canecas de éter, tres mil de acetona, 16.000 galones de gasolina, 400 frascos de ácido clorhídrico y cinco mil baldes para el procesamiento de cocaína; todo apilado en ranchos bajo tejas de zinc”*.² Según la Policía, allí se producían 7.000 millones anuales de cocaína, que comerciaba el Cartel de Medellín. Para la época, ya la presencia de las Farc había dejado de ser esporádica en la

¹ Leal, Claudia. A la Buena de Dios. La colonización de La Macarena. Editorial Cerec, 1996.

² Gilibert, Luis Ernesto. En Hablan los Generales, Editorial Norma, 2006. Pag. 176

zona, y se había establecido el origen del vínculo de esta guerrilla con los cultivos ilícitos. Entonces cobraban gramaje y existe evidencia de que cobraban a los narcos por cuidar sus laboratorios. Para muchos analistas, este fue el principio del desangre de la Unión Patriótica, pues las primeras matanzas contra personas de este movimiento ocurrieron en Meta, especialmente en Puerto Rico, a manos de Gonzalo Rodríguez Gacha, en retaliación por un negocio de droga con un frente de las FARC.

Muchos de los primeros colonos de La Macarena fueron ex guerrilleros liberales que huyeron de la violencia y muy fácilmente hicieron transito de su militancia hacia el Partido Comunista. Para cuando los narcotraficantes llegaron a La Macarena, ya las Farc no sólo hacían presencia permanente en la región sino que habían construido allí los cuarteles generales del secretariado: la famosa Casa Verde. De hecho, en las historias orales los colonos recuerdan la presencia del Estado sólo por el aire, cuando en 1991 el gobierno de César Gaviria hizo fuertes bombardeos para llegar hasta el Secretariado³.

Este cóctel de colonización, narcotráfico y guerrilla sería el que durante dos décadas cocinaría a fuego lento los desenlaces de hoy. Como dice el sociólogo Omar Gutiérrez: *“En una perspectiva histórica no es arriesgado decir que en las subregiones del Ariari y Duda-Guayabero se establecieron, hacia los años sesenta y setenta, comunidades políticas campesinas marcadas por el destino común sellado por la violencia y determinado por el período de luchas entre ellas”*.⁴ Por eso resulta explicable que la tradición de los colonos-campesinos de La Macarena, muchos de los cuales provienen de militancia comunista, tengan una fuerte tendencia a organizarse, particularmente en juntas de acción comunal. *“Es un esfuerzo de creación de un orden civil (distinto a los órdenes alternativos de la guerrilla) en el que las organizaciones comunitarias actúan como instituciones más o menos legalizadas pero con un alto grado de legitimidad frente a los habitantes de veredas y corregimientos”*.⁵ Por razones históricas, políticas y económicas, el destino de los colonos de La Macarena parece estar ligado al de las Farc hasta hoy, cuando el gobierno del Presidente Álvaro Uribe puso en marcha la Operación Colombia Verde, que busca erradicar manualmente la coca sembrada en la reserva natural de La Macarena.

³ Ibid. Leal, Claudia. Pag. 96

⁴ Gutiérrez Lemus, Omar. Desarrollo rural alternativo y economía política de la coca en el Meta. Asdi-PNUD. Diciembre de 2005. pag.95

⁵ Ibid, pag. 98

Coca y guerra

Desde los años 90 las Farc ha virado buena parte de su economía hacia la coca. De cobrar un impuesto al “gramaje” a los cultivadores, pasó a controlar el mercado en sus zonas de influencia. Después del año 2002 se tienen evidencias de que algunos frentes guerrilleros han dado un paso más allá y se han involucrado en el tráfico. En 1999, cuando el gobierno de Andrés Pastrana estaba en diálogos con las Farc, se inició el Plan Colombia, una iniciativa apoyada por el gobierno de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico. El Plan Colombia tenía tres componentes básicos: la erradicación de cultivos por medio de fumigaciones; la interdicción para decomisar droga y capturar narcotraficantes; y el desarrollo alternativo que era apenas el 15% del total del Plan, que en los tres primeros años costó 3.200 millones de dólares. Los primeros resultados del Plan Colombia parecían correctos. Los cultivos pasaron rápidamente de 140.000 a 113.000.⁶ Sin embargo, al tiempo que se implementaba el Plan, el gobierno de Andrés Pastrana mantuvo una zona de distensión para dialogar con las Farc. Eran 42.000 kilómetros cuadrados, en cinco municipios, tres de los cuales colindan con el Parque Natural La Macarena: Uribe, Vistahermosa y La Macarena. En este tiempo los cultivos de coca se expandieron en la región. La dinámica económica que se había generado queda demostrada con la carretera que las propias Farc construyeron entre San Vicente del Caguán y la Macarena, que tiene 280 kilómetros y que se conoce como Transjojoy.

En el 2003 hubo un importante viraje. Álvaro Uribe había ganado la presidencia el año anterior, y desde el 11 de septiembre de 2001 la agenda antidrogas había quedado completamente subyugada a la agenda contraterrorista. El Plan Colombia, que requería ser aprobado por otros tres años, viró hacia la lucha contrainsurgente. La lucha contra las drogas y la contrainsurgencia quedaron amarrados en una simbiosis que se conserva hasta ahora. A principios del 2004 las fuerzas militares, con el respaldo del Comando Sur de los Estados Unidos, lanzaron un ambicioso plan contrainsurgente llamado el Plan Patriota, destinado a recuperar el control territorial sobre la selva profunda que había estado a merced de las Farc durante décadas. Desplegó tropas profesionales, bien equipadas y con alta tecnología, en el Caguán, Guaviare y Meta. Durante los dos primeros años la presencia militar, y las fumigaciones, contribuyeron a que bajaran sustancialmente

⁶ Este año se incrementaron en 20.000 hectáreas. Los analistas de NAS dicen que si no se hubiese fumigado la situación sería peor, desconociendo que los mercados han permanecido relativamente estables en los últimos años.

los cultivos en Guaviare (el Retorno, Calamar y Miraflores) y Caquetá (San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá). No así en Meta que pasó de tener 9.222 hectáreas de coca en el 2002, a 17.305 en el 2005.⁷

En el Parque Nacional de La Macarena, según el Simci, a diciembre 31 de 2005, el área sembrada era de 3.354 hectáreas. Que si bien representan un incremento del 24% con relación al año anterior, son poco significativas comparadas con la magnitud de cultivos en regiones como Nariño. Adicionalmente, la misma fuente registra cómo la mayoría de los lotes de coca tienen menos de tres hectáreas. Por eso la Operación Colombia Verde analizada bajo la lente de la eficiencia de la erradicación de cultivos, y de golpear las finanzas de las Farc, y por esta vía debilitar su estructura genera muchas dudas.

En consecuencia ¿Existen beneficios subyacentes que justifiquen los altos costos en los que está incurriendo el Estado manteniendo la Operación Colombia Verde? ¿Qué racionalidad explica semejante esfuerzo? ¿Se trata de un simple capricho presidencial?

Empiezan los cuentos

El 26 de diciembre de 2005 las Farc atacaron un batallón del Ejército que se encontraba en la zona rural de Vistahermosa, Meta, custodiando la erradicación manual de cultivos que venía haciéndose desde meses atrás. El golpe resultó ser el más duro que haya recibido la fuerza pública desde que se inició el gobierno de Álvaro Uribe. Murieron 29 soldados y quedaron heridos nueve. Una semana después Uribe, que estaba en plena campaña para lograr su reelección, anunció que erradicaría manualmente las 4.558 hectáreas de coca que había en el Parque Natural La Macarena.

La fumigación de los Parques Naturales había sido duramente criticada por muchos sectores de la opinión pública, y en particular por algunos gobiernos europeos. De otro lado, en el 2005 se había iniciado un experimento de erradicación forzada manual, utilizando a campesinos, en zonas donde era imposible fumigar bien fuera porque lo pequeño y dispersos de los cultivos hacía ineficiente la fumigación, o bien porque la geografía quebrada y la enorme nubosidad hacían imposible el uso de helicópteros y avionetas para tal fin.

⁷ Censo de cultivos de Coca 2005. Simci-UNODP.

El programa había empezado ese año con la meta de erradicar 8.000 hectáreas, utilizando 64 grupos móviles de erradicadores, con un costo total de cinco millones de dólares. Pero en diciembre las metas se habían cumplido con creces. Habían sido erradicadas 34.000 hectáreas, con un costo promedio de un millón de pesos cada una, y estaban trabajando en ello 1.600 campesinos. La estrategia, ingenjada por el Alto Consejero Luis Alfonso Hoyos inicialmente para que no se fumigara en Caldas, el departamento de donde es oriundo, a la vez que se creaba un programa masivo de empleo para un sector de campesinos que otrora se dedicaba a coger café. De hecho la mayoría de los campesinos erradicadores de estos grupos móviles provienen de la zona cafetera.

Era la primera vez que se hacía erradicación forzada manual. Una estrategia que en cambio había sido usada de tiempo atrás en Perú y Bolivia, países donde nunca se fumigó. Esta nueva estrategia se diferencia de las otras dos estrategias de erradicación: la aspersión aérea (que también es forzada), y la erradicación voluntaria, inscrita en programas de familias guardabosques o de sustitución de cultivos. La fumigación es una forma de erradicación forzada que usualmente ha estado acompañada del impulso de proyectos de desarrollo alternativo en las áreas fumigadas más intensamente. Putumayo es un buen ejemplo de ello. El modelo de erradicación voluntaria conocido como familias guardabosques que consiste en el compromiso de toda una vereda de acabar con los cultivos, a cambio de un subsidio mensual de 350.000 pesos por familia por tres años. Adicionalmente se buscan créditos e impulso a cultivos alternativos. Guardabosques tienen una condición: si alguien en la vereda defeciona, el programa se acaba para todos. Por eso una de las condiciones es delatar a quienes continúen sembrando coca.

En las zonas donde se había erradicado forzada y manualmente, como Cauca y sectores de Nariño, se había comprobado que la estrategia tenía ventajas grandes sobre la fumigación. Los grupos móviles arrancan la coca de raíz, mientras los campesinos han aprendido a eludir el glifosato bien sea bañando las hojas de coca con melaza, o podando las matas, lo que les significa perder una cosecha pero no el cultivo. En segundo lugar, se destruyen semilleros, insumos y pequeños laboratorios donde se procesa la coca para sacar la pasta de coca. Tercero, la presencia de la policía en las fincas durante los operativos de erradicación tiene un mayor efecto disuasivo pues el campesino siente que

puede perder su tierra o ir a la cárcel si continúa en la actividad ilícita. *“Esto puede comprobarse porque donde se ha hecho erradicación manual forzada se presenta menos resiembra”* dice el director de la Oficina Contra las Drogas de Naciones Unidas en Colombia Sandro Calvani⁸. Por último, la presencia militar y coercitiva del Estado en las zonas de cultivos interrumpe la cadena comercio que suele beneficiar a los grupos armados.

La aspersión y la erradicación voluntaria estaban descartadas para el Parque Nacional La Macarena. La primera, por los costos políticos que implicaba para un Presidente en campaña para la reelección y cuyas relaciones con Europa estaban en mora de ser mejoradas. Aunque el gobierno ha defendido en todos los escenarios que el glifosato no es letal para los ecosistemas, los estudios académicos divergen de este concepto⁹.

La erradicación voluntaria estaba descartada. Primero que todo porque, a juicio del gobierno, los campesinos ubicados en zonas del parque no tienen ni tendrán títulos de propiedad y el Estado no busca promover dentro del Parque ningún tipo de actividad agrícola. Segundo, y quizá la más importante, aunque no explícita en los documentos oficiales, porque el gobierno considera que se trata de una población que hace parte del proyecto insurgente de las Farc. Adicionalmente, las Farc ya habían enviado diversos mensajes anunciando la prohibición de que los pobladores se acogieran a programas gubernamentales de erradicación voluntaria como familias guardabosques.

En el área planteada existen varios frentes de las Farc. El frente 40, que opera en La Uribe, cuyo jefe máximo conocido como John 40 es considerado parte de la tercera generación de las Farc. La que nació y creció en medio del narcotráfico. El frente 26, que actúa en Meseta; el 27 en Vistahermosa, los frentes VII y I que actúan en La Macarena, el frente 43 que se tiene presencia en Puerto Rico. Todos ellos pertenecen al Bloque Oriental de las Farc, que dirige el Mono Jojoy.

⁸ Entrevista con Sandro Calvani, director de la Oficina contra las Drogas y el Delito de Naciones Unidas en Colombia. Marzo de 2006.

⁹ En documentos de debate #2 de la serie drogas y conflicto que publica el Transnational Institute TNI- se explica como el problema de la fumigación no está en el glifosato sino en otros aditivos que tiene la fórmula de aspersión. En concreto se trata del cosmoflux.

Las malas cuentas

Es así como en enero de 2006 se plantea la Operación Colombia Verde como un juego de suma cero entre gobierno y guerrilla. Sin embargo, varios de los supuestos de este juego carecían de información adecuada y han desembocado en desenlaces subóptimos para el Estado. Las siguientes páginas pretenden poner de manifiesto estas contradicciones y analizar las distintas estrategias que se jugaron los actores, en particular durante la primera fase de la operación, las cual se desarrollo entre el 20 de enero y el 30 de abril.

El 20 de enero llegaron a San José del Guaviare 1.500 policías, 930 erradicadores civiles y 200 toneladas de alimentos. Ese día comenzó la operación Colombia Verde que estaba programada para cuatro meses en los cuales se erradicarían las 4.598 hectáreas de coca. El Parque Nacional de La Macarena es un territorio de intensa confrontación militar, sembrada de minas antipersonales, y territorio inhóspito y hostil para las fuerzas del Estado. Sin embargo, con el espectáculo mediático que corresponde a un hecho propagandístico, este arrancó.

Los 930 erradicadores que llegaron allí eran en su mayoría de la región cafetera, y unos pocos, de otras regiones. Todos habían participado anteriormente en programas de erradicación manual forzada, incluso en zonas donde con frecuencia se presentaban combates. Sin embargo, 12 días después de estar en la zona se presentó el primer incidente grave. Un ataque con morteros de la guerrilla mató a seis policías, hirió a otros siete y un jornalero. De inmediato se produjo una reacción que no estaba en los cálculos del gobierno. En menos de dos semanas habían desertado del programa 620 de los erradicadores. Los hombres, que habían sido reclutados a través de un proceso cuidadoso de entrevistas, que gozaban de experiencia, y para quienes inicialmente el incentivo de 27.000 pesos diarios, la afiliación a la seguridad social y el tener la comida asegurada eran incentivos suficientes, se fueron sin que hubiese poder humano que les hiciera volver. Informaciones de prensa señalaron que la deserción tuvo origen no sólo en los riesgos de seguridad sino en las incontables restricciones a las que se veían sometidos: no había panela, no se podía fumar en las noches, y la vida del campamento era palabras más, palabras menos, como una vida guerrillera¹⁰.

¹⁰ Hernández, Salud. "Arrancar la coca vale la vida" Revista Crónica.

Después del primer incidente vinieron otros de minas antipersonales instaladas por la guerrilla en las matas de coca. Por este motivo murió uno de los erradicadores en la primera quincena, lo cual también provocó una segunda ola de desertión. Después de estos episodios el Presidente Álvaro Uribe acudió a La Macarena y ordenó dos medidas para continuar con el programa: reforzar con 1.500 policías el área, y entregarle un subsidio de vivienda a cada erradicador. El programa continuó con menos de una tercera parte de los erradicadores que se había planteado inicialmente, pero con dos veces más policía, y tres veces más del tiempo necesario para alcanzar la meta. Dicho de otra manera, con un costo económico muy alto, y un costo humano incalculable.

¿Por qué funcionaron estos incentivos en un grupo y en otro no? ¿Por qué una parte de ellos consideraba que tenía información completa sobre lo que viviría y otra parte no?

Primer supuesto: la plata compensa los riesgos

Un primer supuesto del gobierno parecería haber fallado. La idea de que los incentivos selectivos individuales, económicos, serían suficientes para soportar el riesgo; y que la información aportada por los funcionarios gubernamentales era suficiente para que los erradicadores midieran la magnitud del riesgo, demostraron ser falsas.

El cálculo del gobierno al iniciar la operación, partía de una supuesta racionalidad de unos campesinos pobres, que no tenían ninguna opción laboral. En este sentido los factores que condicionaban la decisión de los campesinos se podían resumir en:

E₁ Los incentivos económicos prometidos inicialmente que correspondían a 27.000 pesos (un 80% más del jornal normal de un campesino que es en promedio 15.000). Además, se incluía seguridad social, seguro de vida, la alimentación y el uniforme.

S₁ Un operativo de seguridad que consistía en 1.200 policías, apoyados por una brigada del Ejército.

I₁ La información básica disponible para los campesinos sobre las dificultades y la protección a su disposición, antes de llegar a La Macarena.

R El riesgo de sufrir un ataque militar.

P_R Constituía la probabilidad de que cada campesino fuese blanco de ataque.

Al momento de iniciar la operación Colombia Verde la ecuación de racionalidad de los campesinos participantes estaría constituida como sigue:

$$E_1 + S_1 (I_1) > [R (P_R)] I_1$$

Esta ecuación hizo que 930 campesinos erradicadores llegaran hasta la zona de La Macarena y comenzaran su trabajo.

Pero una vez allí, la mayoría de los erradicadores consideró que la información recibida previamente (**I₁**) era deficiente y una serie de hechos –ataque de las Farc donde murieron ocho policías, la muerte de dos erradicadores, y el estallido constante de minas- les hizo acumular nueva información sobre su situación y la probabilidad de riesgo (**I₂**). Este cambio en la información disponible invirtió la ecuación:

$$E_1 + S_1 (I_2) < [R (P_R)] I_2$$

Es así como, en las dos primeras semanas se produjo una desertión masiva de 620 erradicadores, y de 930, se pasó a 310.

Bajo estas circunstancias, el gobierno convencido de que los incentivos económicos mantendrían la balanza inclinada a su favor, ofreció nuevos premios. A quienes se quedaran, les brindaría un subsidio de vivienda. Adicionalmente se resolvieron problemas logísticos básicos como la alimentación (la panela) y se mejoraron las condiciones del campamento. Esta nueva serie de promesas creó un nuevo paquete de incentivos económicos (**E₂**). Por otra parte, la llegada de 1.500 nuevos policías generó una nueva situación de seguridad (**S₂**) que contribuyó a calmar los ánimos. Este cambio en las condiciones económicas y de seguridad generó un nuevo equilibrio, esta vez favorable a la continuación de la erradicación.

$$E_2 + S_2 (I_2) > [R (P_R)] I_2$$

En cualquier caso este nuevo equilibrio no fue equivalente al anterior, pues apenas una tercera parte de los erradicadores decidió quedarse, y los costos para el gobierno se incrementaron, así como el tiempo requerido para cumplir las metas.

Cabe preguntarse cuáles son los elementos diferenciadores en la racionalidad de cada erradicador que condujo a unos a abandonar el proyecto y a otros a continuar en él. En ese sentido una mirada a los microfundamentos de su comportamiento puede arrojar alguna luz.

Aunque no tuvimos acceso a las bases de datos completas de los erradicadores, su origen y características que permitieran hacer una lectura sobre el perfil de quienes se quedaron y quienes se fueron, aportó a nivel de entrevista algunos datos básicos¹¹:

-Origen: En la segunda fase de la Operación Colombia Verde quedaban en La Macarena 248 erradicadores. Todos provenientes de dos regiones: 124 de Finlandia, Quindío y 124 de Manzanares, Caldas.

-Edad: Con algunas excepciones, quienes se habían quedado estaban entre los 30 y los 50 años. Quienes salieron eran los más jóvenes.

-Experiencia de grupo: adicionalmente, permanecieron más quienes tenían experiencia en erradicaciones anteriores, y hacían parte de grupos antiguos, en contraste con quienes hacían parte de grupos recién integrados y que eran mixtos.

En entrevistas con varios de los erradicadores que se quedaron en el programa pudo evidenciarse que la promesa de un subsidio de vivienda inclinó significativamente la balanza¹². Los que se quedaron fueron los menos jóvenes, que por lo general *“tienen obligación”*, es decir, una familia para mantener.

¹¹ Entrevista con Victoria Eugenia Restrepo, directora del programa de erradicación de cultivos ilícitos. Acción Social de la Presidencia de la República. Junio de 2006.

¹² Viaje realizado al sitio de la erradicación el 23 de junio de 2006.

Martín Andrés Quiroz, el erradicador más joven, de 22 años, que se quedó porque *“cuando estábamos más asustados vino el Presidente y nos dio moral”*. En particular a él, Uribe le prometió ayudarlo con una operación para los ojos de su hermano menor que es casi ciego. La promesa está en proceso de cumplimiento. Adicionalmente, dice que confía en la labor que está haciendo la policía, y que la fe en Dios le ayuda a no desfallecer. Más adelante, sin embargo, cuenta que durante un descanso de diez días estuvo tentado a quedarse en la casa y no volver pero *“uno sale y ve el hambre tan berraca de la familia, y se devuelve”*¹³.

Segundo supuesto: Los costos económicos y humanos de la operación siempre serán compensados por los beneficios políticos y estratégicos.

Frente a los primeros visos de que la operación fracasaría, por el ataque de las Farc y la subsiguiente deserción de 2/3 de los erradicadores, el gobierno se enfrentó a un dilema: continuar la erradicación manual, a pesar de que se elevaron enormemente sus costos, o fumigar. La opción de suspender toda operación estaba descartada.

Fumigar era más barato y menos riesgoso, pero implicaba someterse a un gran cuestionamiento nacional e internacional en plena campaña para la reelección. Además, el golpe de la guerrilla había convertido la operación en un pulso Uribe-Farc, y elevado las apuestas políticas en juego. Si el objetivo principal de la operación fuera acabar con las 4.598 hectáreas para debilitar las finanzas de la guerrilla, posiblemente se hubiese fumigado, y pagado los costos políticos de hacerlo. Pero el gobierno tenía en mente un objetivo más allá: debilitar la base social de las Farc en una zona histórica donde funciona buena parte del apoyo al Secretariado. Una región desde donde se apuntalan los nuevos planes estratégicos, y que ha servido le ha servido a la insurgencia de escampadero durante las operaciones del Plan Patriota.

La racionalidad del gobierno podría formalizarse de la siguiente manera:

C_{EM} Costos de la erradicación manual por unidad de tiempo que resulta de la suma de: G_{EM} que son los gastos financieros de la operación y P_{EM} que son las pérdidas humanas durante el tiempo que dure la erradicación. ($C_{EM} = G_{EM} + P_{EM}$)

¹³ Ibid. Entrevista con Martín Andrés Quiroz.

C_{EA} Costos de la erradicación aérea por unidad de tiempo que se descomponen en **G_{EA}** que son los gastos financieros de la aspersión y **P_{EA}** que son las pérdidas humanas durante el tiempo que dure la fumigación. ($C_{EA} = G_{EA} + P_{EA}$)

B_P Beneficios políticos obtenidos optando por la erradicación manual medido en aceptación popular de la medida.

B_S Beneficios estratégicos que resulta de la suma de **D_F** debilitamiento financiero de las Farc y **D_B** debilitamiento de la base social de las Farc. ($B_S = D_F + D_B$)

Sin embargo, el diferencial de beneficio estratégico de la erradicación manual (**BS_M**) y el beneficio estratégico de la erradicación aérea (**BS_A**) depende únicamente de cuál de las dos opciones sea más óptima para debilitar la base social de la guerrilla (**DB_M** en el caso de la erradicación manual o **DB_A** en el caso de la aspersión) puesto que el debilitamiento de las finanzas de la guerrilla con cualquiera de los dos métodos es semejante (**DF_M** en el caso de la erradicación manual o **DF_A** en el caso de la aspersión) en el supuesto que se cuente con un volumen de insumos ilimitado para desarrollar cualquiera de las dos versiones de la erradicación.

Dicho de otra forma: para que $BS_M > BS_A$ sea cierto, se requiere que $DF_M + DB_M > DF_A + DB_A$. Pero si $DF_M = DF_A$ esto implica que $BS_M > BS_A$ siempre que $DB_M > DB_A$. En consecuencia, podemos decir que la racionalidad que empuja al gobierno a desarrollar la Operación Colombia Verde se podría formular como sigue:

$$B_P + DB_M - C_{EM} > DB_A - C_{EA}$$

Según este supuesto, cada una de las 32 cuadrillas de erradicadores arrancaría 5 hectáreas al día. En promedio, se pensaba que cada día se podían erradicar 150 hectáreas. Contabilizando el tiempo de movimiento de los grupos, en la primera etapa debían erradicarse 2.500 hectáreas y en 100 días de operación, el trabajo estaría terminado.

Durante la primera fase sólo la Policía gastó 3'620.000 pesos por hectárea erradicada (1.500 US aproximadamente). Es decir, 4.486'540.000 millones de pesos (1'800.000 US) La mayor parte de estos recursos provienen del Plan Colombia y han sido entregados por la embajada americana a regañadientes¹⁴.

Los costos en los que incurrió la Presidencia para pagar a los erradicadores en la primera fase son: En los primeros 17 días, 426'870.000, y en los 73 días restantes 611' 010.000 (Un total de 414.800 US).

Según cálculos hechos por funcionarios de NAS¹⁵ el costo de cada hectárea erradicada por aspersión es de 595 US. En cualquier parte del país la erradicación manual está costando mucho menos: 400 US por hectárea. Un operativo de aspersión puede fumigar la misma cantidad de hectárea en sólo un día.

Si consideramos que en la primera fase, que duró 90 días se erradicaron 1.267 hectáreas (14 al día) tenemos que el costo aproximado de 25.200 US¹⁶. Es decir, que para cuando se complete la operación los costos serán de 7'560.000 US. Desde el punto de vista económico, el programa más ineficiente del mundo.

Adicionalmente, los costos humanos de la operación han sido hasta ahora demasiado altos, como se observa en el siguiente cuadro.

¹⁴ En entrevista, un alto funcionario de la embajada explicó que la política oficial de Estados Unidos es que La Macarena debía ser fumigada. Pero respaldan la erradicación manual por razones políticas: el momento en que se inició la operación era crucial darle apoyo al presidente Uribe.

¹⁵ Agencia Nacional de Seguridad. Entidad del Departamento de Estado que coordina en la Embajada de Estados Unidos todo lo relativo a las fumigaciones.

¹⁶ Cifras entregadas por el General Daniel Castiblanco, comandante de la Séptima Región de la Policía y por la oficina de Acción Social de la Presidencia.

Costos primera fase comparados con otras operaciones

	Muertos	Heridos	Costo hectárea (US)
La Macarena	14	15	1.800
Erradicación manual en otras zonas	2	7	400
Aspersión	0	0	595

Los problemas de información que se reseñaron en el capítulo anterior demuestran que los cálculos fallaron y al final la primera fase apenas se habían erradicado 1.100 hectáreas, había 12 policías y dos civiles muertos y 15 heridos. El cálculo que hace la Policía es que se requerirá un año para terminar la erradicación. Cuatro veces más de lo esperado. Es decir, los costos totales se multiplicaron en función de la prolongación del tiempo (T). Dicho de otra forma, si $T=4$ entonces $C_{EM} = (G_{EM} + P_{EM}) \times 4$

Pero además de los costos humanos y económicos, el problema mayor es que los más recientes informes demuestran que a pesar de la erradicación (sea manual o aérea) los cultivos están creciendo. Según lo anticipa el informe el Informe de Naciones Unidas sobre cultivos ilícitos para el año 2005¹⁷, el incremento de un 8% en los cultivos ilícitos – cifra consistente en la tendencia con los informes de la CIA¹⁸- demuestran que el método de erradicación es trivial, frente al problema crucial que explica que no se reduzcan los cultivos: la resiembra.

¹⁷ Ib id. Informe Simci- ONUDP 2005

¹⁸ Ver informe Departamento de Estado sobre droga

Está probado, y así lo admite el gobierno, que lo único que funciona contra la resiembra es el desarrollo alternativo. En los lugares donde se ha hecho erradicación voluntaria con programas de desarrollo o familias guardabosques, se ha constatado que la resiembra no pasa del 10%¹⁹. Sin embargo está descartado de plano cualquier programa de atención a las familias de La Macarena. *“Esto es un parque, ellos no tienen títulos ni los tendrán y la intención del gobierno es apostar por la reforestación”* dice Victoria Eugenia Restrepo.²⁰

Desde otro punto de vista la ganancia estratégica tampoco es obvia. *“Desde que se inició la operación la interdicción cayó en un 50%”* dice un funcionario de la embajada americana²¹. La explicación es que muchos de los helicópteros y de los hombres de la policía se han concentrado en La Macarena. Dos mil setecientos policías, entre junglas y carabineros, permanecen en el área. La tarea de desactivar explosivos se lleva casi todo el tiempo²². Hasta el 23 de junio los resultados militares eran los siguientes:

Resultado	Número
Guerrilleros muertos	7
Campamentos encontrados	32
Laboratorios destruidos	137
Minas destruidas	303
Casas bomba	4
Carros bomba	5
Base de coca (kilo)	6.246

Para el gobierno, el debilitamiento de las Farc en esta operación no pasa tanto por golpear sus estructuras como por golpear una base social que considera leal a las Farc.

Tercer supuesto: la población abandonará la coca

Un tercer supuesto dudoso es que la población civil abandonará la zona y el cultivo de coca y por esa vía se debilitará a las Farc. Para cualquier campesino del país es más rentable plantar cultivos ilícitos (**C_I**) que cultivos lícitos (**C_L**), por razones obvias de

¹⁹ Datos suministrados por Victoria Eugenia Restrepo, con base en Monitoreo de la UNODP.

²⁰ Entrevista.

²¹ Ibid.

²² Según el observatorio de minas antipersona de la Vicepresidencia de la República, el Meta tiene el 9,62 por ciento de minas de todo el país. Los municipios con mayor riesgo son Puerto Rico con 102 incidentes en los últimos 15 años y Vistahermosa con 190.

rentabilidad, siempre y cuando no haya presencia de un actor armado que establezca coerción para tal fin. Para el caso de las Farc esta coerción la llamaremos (A_F).

En consecuencia para un campesino cocalero común $C_I > C_L - A_F$. Sin embargo, cuando entra una operación de erradicación forzada donde la acción del gobierno es (A_G) la ecuación cambia y se puede considerar de la siguiente manera:

$$C_I - A_G < C_L - A_F$$

En el caso de La Macarena, no hay cultivos lícitos. Por tratarse de un parque natural, sin opción de títulos, la posibilidad de una economía lícita es nula ($C_L=0$). La ecuación entonces para los campesinos cocaleros de La Macarena es:

$$C_I - A_G > 0 - A_F = C_I + A_F > A_G$$

Esta situación, de perderlo todo con la acción del gobierno, llevó a que al final de la primera fase de la Operación Colombia Verde se iniciara un movimiento de campesinos que logró la suspensión por diez días de la erradicación. Los campesinos, dos mil aproximadamente, literalmente se convirtieron en escudos humanos. *“Ellos seguían la ruta de los erradicadores y entraban a los cultivos, hacían cadenas humanas, empujaban a los erradicadores y policías, nos tiraban piedras y gritaban consignas”* dice el Mayor Edgar Enrique Muñoz²³. La manifestación, que estuvo respaldada por las Farc, según reportes oficiales, tuvo que ser disuelta por un escuadrón antidisturbios transportado en helicóptero, específicamente para ello. Era la primera vez que estos escuadrones, empleados en manifestaciones urbanas, actuaban en plena montaña.

El gobierno se negó a cualquier tipo de negociación que implicara erradicación voluntaria y desarrollo alternativo. Hace diez años durante las marchas cocaleras se pactó un programa de sustitución de cultivos bajo la dirección del Plante. Como contrapartes se constituyeron varias asociaciones de productores: (Asoproaju –de La Julia-, Asoproadum, Asopepro, y Asoproavih –Vistahermosa- y Asoproguejar –en la cuenca del río Guejar. Se

²³ Entrevista con el Mayor Edgar Enrique Muñoz, comandante de uno de los escuadrones móviles de carabineros que hace parte de la Operación.

iniciaron proyectos de caucho, ganadería y piscicultura. La oficina del Plan Colombia (FIP) registra que sólo entre 2002 y 2005 se invirtieron en la región 6.000 millones en apoyo a proyectos productivos. Los cultivos ilícitos, sin embargo, crecieron en el Parque La Macarena en un 24%.

Es un hecho que la economía legal no puede competir con la economía de la coca, por la fuerte presencia de las FARC que garantiza un mercado permanente. Fuentes del gobierno aseguran que los sembrados de coca son directamente de las FARC y que muchos de los campesinos son apenas cuidanderos de estos predios. Una tesis que no parecen corroborar las cifras. El último informe de las Naciones Unidas muestra por ejemplo que en Puerto Rico, jurisdicción donde se ha hecho la mayor parte de la erradicación, 2.402 hectáreas, corresponde a 2.308 lotes diferentes. Es decir, cada cultivo tiene apenas una hectárea en promedio. Lo cual induce a pensar que no se trata de cultivos industriales sino de parcelas de carácter familiar.

No obstante, el gobierno optó por una estrategia de sólo garrote para los habitantes del Parque La Macarena, sin ningún tipo de zanahoria. La estrategia tiene dos ejes: erradicar y judicializar. Con cada grupo de erradicadores va un grupo de policía judicial que realiza un empadronamiento a las familias que habitan en los cultivos. Dicha información pasa a manos de la Fiscalía. Como los campesinos no tienen títulos sobre las tierras, no existen pruebas que los cultivos sean de ellos. En cambio, estos registros pueden servir como parte de un esfuerzo para recolectar inteligencia y/o iniciar procesos judiciales por rebelión.

Al no haber incentivos positivos para dejar la actividad de la coca, y la presencia del Estado ser apenas temporal, los campesinos muy seguramente reincidirán en la resiembra de coca, una vez el vendaval de erradicadores se haya ido. Y en consecuencia, el debilitamiento a las Farc no es tan obvio.

Al ser interrogados sobre la resiembra en los primeros predios erradicados, varios oficiales de policía asentados en la base antinarcóticos de San José de Guaviare respondieron: *“ya todo debe estar sembrado otra vez”*. El operativo policial pasa y arrasa los cultivos. Y es el ministerio del Medio Ambiente quien tiene en adelante la tarea de conservar el parque. Pero no existe ninguna estrategia para garantizar que donde había

cultivos de coca, no haya resiembra. Sin embargo, sólo el monitoreo satelital y sobre el terreno que se haga en unos meses podrá establecer con precisión de que magnitud ha sido la resiembra.

Conclusiones: desafiando la racionalidad

1. Las metas del gobierno con la Operación Colombia Verde se pueden resumir en dos. Por un lado, disolver la base social de las Farc en La Macarena, quebrando la economía de la coca que vincula a los pobladores del Parque Natural con la guerrilla. Y simultáneamente, por otra parte, obtener réditos políticos llevando a cabo la erradicación de los cultivos ilícitos de La Macarena por medios manuales, evitando la pérdida de popularidad que significaría la fumigación.
2. Ganancia política e incentivos positivos para disolver la base social de las Farc en La Macarena son contradictorios. La ganancia política está asociada a la recuperación del Parque Natural La Macarena, lo que implica una prohibición de cultivos de cualquier tipo. Los incentivos positivos obligarían a ofrecer a las familias de La Macarena la posibilidad de hacer cultivos legales en el espacio del Parque. Bajo este esquema es imposible proporcionar incentivos positivos para la erradicación sin traicionar la lógica política de la operación.
3. En la medida en que no existe ningún incentivo positivo para animar a las familias que habitan el Parque a abandonar los cultivos ilícitos, necesariamente el gobierno apuesta únicamente por los incentivos negativos asociados al uso de la fuerza para forzar la ruptura de los pobladores de La Macarena con el narcotráfico y las Farc. Eso implica que la cantidad de fuerza empleada debe ser muy superior a la utilizada en casos semejantes en otros lugares del país porque aquí no existe ningún incentivo para que voluntariamente se abandone la coca.
4. Muy probablemente un uso tan masivo de la fuerza tendrá efectos no deseados sobre la población de La Macarena. Que si bien en el mejor de los casos se verán obligados a abandonar el cultivo de la coca, con seguridad quedarán definitivamente enfrentados al Estado. De este modo, podrían dejar de ser base social de las Farc pero muy difícilmente llegarán a serlo del Estado.
5. La previsión de costos de la Operación Colombia Verde realizada por el gobierno con toda probabilidad quedará ampliamente superada a medida que transcurra el tiempo. De hecho, el gobierno ya tuvo que hacer una inversión adicional relevante

para frenar la deserción de los erradicadores motivada no tanto por una escalada en el nivel de riesgo que confrontaban, sino por una diferencia entre sus expectativas sobre cuáles iban a ser las condiciones de la operación y la realidad de la misma. Esta inversión adicional sólo consiguieron parcialmente frenar la diáspora. Es previsible que si los erradicadores que volvieron al trabajo enfrentan un salto cualitativo, esta vez no en su percepción sino en el nivel de amenaza real, el gobierno tendrá que realizar una inversión masiva para tratar de garantizar la continuación de los trabajos.

6. La prolongación de las tareas de erradicación, la permanencia de las dificultades de seguridad y, en consecuencia, los costos de la operación, tenderán a incrementarse hasta el punto de que podrían anular cualquier posible beneficio que el gobierno espere obtener de la Operación Colombia Verde. A medida que la operación se prolongue, los costos financieros y las pérdidas humanas tenderán a acumularse. Este desgaste no sólo supondrá un desangre financiero y humano para el gobierno sino que traerá aparejado desgaste político. Éste muy probablemente terminará anulando cualquier posible rédito de popularidad que las autoridades esperaran obtener al comienzo de la operación.
7. Por eso la Operación Colombia Verde no es un asunto de locos. Simplemente parte de cálculos errados y de información deficiente. Ante la contingencia de la crisis presentada al principio de la misma, se cambiaron las reglas del juego. Pasó de ser una operación de asalto, a una campaña sostenida, como el Plan Patriota. Pasó de un ingreso masivo de erradicadores que garantizaría rápidos resultados y menor riesgo, en función del poco tiempo que habría que invertir en ella; a una operación prolongada, riesgosa y muy costosa. La Operación Colombia Verde no es asunto de locos, pero muy bien puede decirse, que es asunto de tercios.